

Olida Internacional

INICIATIVA EN FAVOR DEL DESARME

En el curso de diciembre, la atención mundial ha estado atraída por el viaje del presidente Eisenhower al Asia y algunos países de Europa, mientras las cancillerías de los Grandes de Occidente aparecían preocupadas por las divisiones surgidas entre ellos por diversos motivos. Entre tanto, los latinoamericanos han seguido con interés las vicisitudes de un asunto que les afecta de modo más directo: la limitación de las fuerzas armadas de los diversos países del continente. No deja de ser sintomático que esta materia interese más al latinoamericano de la calle que la postergación de la Conferencia Interamericana de Quito, por ejemplo. Para bien o para mal, los ejércitos son algo mucho más importante para los latinoamericanos, que los acuerdos a que, hipotéticamente, pueden llegar unos señores reunidos en una conferencia diplomática.

Veamos, por el momento, lo más cercano.

A fines de noviembre último, el presidente de Chile, Jorge Alessandri, manifestó a un corresponsal del "New York Times" su extrañeza o repulsa ante el hecho de que los países latinoamericanos, mientras hacían protestas de solidaridad fraternal en cuanto oportunidad se les ofrecía, no desperdiciarían tampoco oportunidad para comprar armamentos que, en el hecho, se adquirirían con vistas a un posible conflicto interlatinoamericano. Tal situación era absurda y era igualmente absurdo que los grandes países industriales de Occidente que buscan ayudarnos, nos vendieran armamentos de segunda mano, endeudándonos por generaciones y promoviendo rivalidades sin sentido cuando no peligrosas. En el fondo, y ateniéndose sólo en el mínimo necesario a las fórmulas diplomáticas, tal cosa significaban las oportunas y acertadas declaraciones del presidente de Chile. Así comenzó la historia.

Cuando el gobernante chileno dijo aquello, la cancillería de su país no ignoraba que uno de sus vecinos, el Perú había gestionado la compra en Gran

Bretaña de dos cruceros de 8.800 toneladas cada uno. Gracias a estas adquisiciones, la marina peruana quedaría casi a la par con la chilena, en circunstancias de que tradicionalmente, la relación de fuerzas entre ambas durante 60 o 70 años había sido, por lo menos, de 1 a 3 en favor de Chile. Esta relación se explica por dos hechos: uno geográfico, cual es la dilatada extensión de las costas chilenas, desde Arica en el paralelo 18° de Lat. Sur hasta la Antártica; y otro político, que es el de que Chile tiene pendiente un conflicto de límites con la Argentina, prolongación de otro que data ya de un siglo y que ha obligado a la Marina chilena a un esfuerzo constante para mantener la posición del país en dos frentes: ante el Perú en el Pacífico del norte chileno, vital para las comunicaciones del centro de Chile con sus provincias septentrionales; y ante la Argentina en el extremo Sur. Esta es, precisamente, una de esas situaciones absurdas entre países integrados en un sistema como el interamericano, que debería por sí solo garantizar la paz y la inviolabilidad de las fronteras de sus miembros y la solución pacífica de sus posibles conflictos.

Ante la situación creada por el armamentismo naval peruano, Chile tenía dos opciones. La tradicional y negativa habría sido participar en la carrera armamentista, adquiriendo también uno o dos cruceros semejantes a los que Perú incorporará a su flota y que, por otro lado, contribuirían a mantener la posición chilena frente a la Argentina, que en 1958 había añadido a su marina de guerra un portaviones de 13.170 toneladas. La opción positiva o constructiva fue la que se tomó: un llamado a la razón, pidiendo que cesara una competencia absurda que hace invertir en un esfuerzo bélico estéril e ineficiente los recursos que nuestros países necesitan para su desarrollo económico.

Las declaraciones del presidente chileno encontraron eco inmediato en su colega peruano, que cursó una carta circular a los gobernantes de América del Sur invitándolos a una conferencia internacional de limitación de los armamentos. Ambos llamados fueron muy bien acogidos por todas las cancillerías del continente y la opinión pública, con alguna ingenuidad, comenzó a concebir esperanzas de fácil realización. Nadie esperaba, por cierto, que el Perú cancelara la compra de un crucero, que ya había finiquitado, pero sí

se supuso que mientras se desarrollaban las negociaciones sobre desarme se suspenderían las adquisiciones bélicas. Los que tal creían ignoraban las "sutilezas" de la política latinoamericana. La Argentina siguió en sus gestiones hasta lograr la transferencia de dos submarinos norteamericanos y adelantó la adquisición de 28 aviones de caza a chorro, sin embargo de que Frondizi había adherido a la iniciativa pro desarme. Perú perfeccionó la compra del segundo crucero y envió una misión aérea a Córdoba (Argentina) para estudiar la compra de una partida de los cazas "Mystère" a retropropulsión que allí se fabrican con licencia francesa. Por otra parte, se anunció desde Washington que pronto se entregarían a las naciones latinoamericanas los armamentos por valor de casi 60 millones de dólares que se les había asignado en el presente año fiscal norteamericano. Es cierto que dichos elementos se transfieren sin costo para los aliados del Hemisferio, pero éstos deben proveer a su mantenimiento, al adiestramiento del personal necesario, y a su eventual modernización y cierto es también que, aunque se trate de distribuirlos en forma de no alterar el actual "equilibrio" de fuerzas, siempre los descontentos tratan de remediar con adquisiciones propias lo que ellos estiman una mala distribución. No podía haberse elegido, a juicio de un comunista al menos, mejor momento para hacer el anuncio de la contribución norteamericana al armamentismo en nuestro continente.

Cuando el Perú formalizó la compra del segundo crucero, el Presidente chileno emitió una nueva declaración, en la que aludió a este hecho y expresó que él no se conciliaba con la aprobación peruana a la iniciativa chilena en materia de desarme. Vale la pena reproducir algunos párrafos de esa declaración, inusualmente franca y directa:

"Estimo urgente dijo el señor Alessandri —acelerar la materialización de la idea de encontrar un sistema que permita la pronta solución de los problemas de límites pendientes. Es preciso también llegar a la más rápida limitación de los armamentos en esta región. Para ello habrá que estudiar las actuales disponibilidades, determinar los que serían estrictamente necesarios para el resguardo de la defensa nacional o el cumplimiento de compromisos internacionales; calcular el monto de

los capitales que se han inmovilizado para adquirirlos, y cuánto cuesta mantener esos equipos.

"Por lo tanto, insisto en lo que dije en mi primera declaración: que de nada vale asistir a conferencias y reiterar declaraciones de amistad, si continúan estas prácticas. Creo que se debe celebrar una reunión preparatoria para elaborar el temario y fijar la fecha de una conferencia especial para los fines señalados. El gobierno de Chile considera que esta conferencia es un requisito previo a cualquiera otra conferencia política interamericana, por cuanto, sólo una vez resueltos los problemas señalados, se alcanzará el clima de confianza y de seguridad indispensables para que, alguna vez, nuestros países puedan crecer en prosperidad y nuestro Continente en prestigio."

No es raro, pues, que la Conferencia que debía tener lugar en Quito haya sido aplazada.

EL ARMAMENTISMO EN AMERICA LATINA

La cancillería peruana emitió, a su vez, una declaración para contestar a la hecha por el Presidente chileno. En lo fundamental, ella expresa que el gobierno de Lima no apoya la idea del "desarme", o sea, la reducción de los armamentos existentes, sino "la limitación de los armamentos", es decir: un convenio para hacer sólo las adquisiciones necesarias para la seguridad de cada país y la defensa continental. Este criterio involucra la aceptación de los niveles actuales como satisfactorios desde el punto de vista económico y militar y trata sólo de prevenir adquisiciones futuras más allá de límites innecesarios a la defensa nacional de cada país y a la seguridad del hemisferio.

¿Resiste este criterio una confrontación con los hechos?

¿Cuáles son los hechos?

América Latina, con 180 millones de habitantes, tiene 645.000 hombres sobre las armas. De éstos, unos 118.000 pertenecen a las marinas de guerra y 527.000 a los ejércitos y fuerzas aéreas. Esto significa que, de cada mil latinoamericanos, 3,6 pertenecen a las Fuerzas Armadas. En algunos países, como la Argentina, Cuba y Nicaragua, la proporción es superior al 7 por mil. Esta proporción —o desproporción— se puede apreciar mejor si se considera que Estados Unidos, la primera potencia de Occidente, con bases establecidas

en todo el mundo y una responsabilidad planetaria, tiene el 8 por mil de su población en las fuerzas armadas. Otras comparaciones serán igualmente ilustrativas.

Francia, potencia clave de la OTAN (¡Y cómo lo ha explotado De Gaulle!), con 45 millones de habitantes y cabeza de una Comunidad de naciones con más de 50 millones de hombres, con un prestigio y una tradición militares de siglos, tiene un ejército superior sólo en una cuarta parte a las Fuerzas Armadas de América Latina.

Gran Bretaña, hasta hace poco la Reina de los Mares, y aún ahora con una responsabilidad mundial dentro del cuadro de las alianzas militares de Occidente (¡tiene 3.000 marineros menos que América Latina! Y en cuanto a Ejército valé más no hacer comparaciones).

La India, con 415 millones de habitantes y la única potencia en Asia capaz de contrabalancear la influencia de China, tiene un ejército aproximadamente igual al de América Latina, pero figuraría en nuestro continente como la tercera potencia naval, después de la Argentina y Brasil.

Los venezolanos deben de saber que Indonesia, con más de 80 millones de habitantes, en un territorio formado por centenares de islas diseminadas a lo largo de más de 5.000 kilómetros y en el nudo de las rutas marítimas del Asia Sudoriental, tiene como barcos mayores de su marina dos destructores iguales a aquéllos de los cuales Pérez Jiménez encargó media docena a Italia.

Fuera de las grandes potencias mundiales, de los países como Turquía, Grecia, Corea y otros aliados a los cuales Estados Unidos, en los últimos diez años, ha entregado miles de millones de dólares en armamentos y ayuda militar (contra 360 millones a América Latina), y de algunas naciones que deben proteger por sí mismas su neutralidad, como Suecia y Suiza, no hay en el mundo libre región más armada que nuestro continente, organizado en un sistema jurídico-político que ha proscrito la guerra...

EL COSTO DEL ARMAMENTISMO

¿Cuánto cuesta este esfuerzo?

Cuatro países de América Latina — Brasil, Argentina, Chile y Venezuela — con menos de cien millones de habitantes, gastan, en números redondos, 1.400 millones de dólares anuales en

sus Fuerzas Armadas. Se calcula que los 18 países latinoamericanos (eliminados Costa Rica y Panamá, que no tienen ejércitos) "invierten" en Defensa Nacional no menos 2.000 millones de dólares al año. (Hay gastos militares disfrazados, que aquí, en estos cálculos, no los incluimos).

¿Qué significa esta cantidad?

—Ella equivale al triple de la que, en promedio, América Latina ha estado recibiendo anualmente por concepto de inversiones privadas del extranjero en el lapso 1950—1957. Bastaría, pues, que los gastos de Defensa se redujeran en un 30% para que, en muchos respectos, el ahorro nacional pudiera reemplazar a las inversiones extranjeras.

—Ella es más del doble de lo que este continente ha recibido en préstamos del Banco Internacional desde que se fundó esta institución hasta comienzos de 1959. Bastaría así que los gastos de Defensa se redujeran en un 10% (¿Es esto utópico?) para que el ahorro nacional pudiera reemplazar, para muchos efectos, y hasta doblar, las sumas que América Latina recibe cada año de la más poderosa institución internacional de crédito.

—Ella es casi el doble de la suma que se necesitaría para financiar un plan Quinquenal de Habitaciones baratas, que solucionaría el problema de la vivienda en América Latina. Sería suficiente, pues, ahorrar un 10% en Defensa Nacional e invertir esos ahorros en hacer casas para eliminar una de las lacras que más corroe la salud física y moral de nuestros pueblos.

¿Podría alguna persona sensata sostener que en un continente donde los dos tercios de la población se acuesta cada noche con hambre (datos de la F.A.O.) y donde se necesitan 400.000 maestros para eliminar el analfabetismo (datos de la UNESCO) es satisfactorio gastar 2.000 millones de dólares al año — ¡3.800.000 dólares semanales! — en mantener a 645.000 hombres sobre las armas?

LAS PEQUEÑAS DIFICULTADES

Ninguna persona razonable podría tampoco propugnar la completa e inmediata abolición de las fuerzas armadas en América Latina. Ello es imposible por varias razones, algunas de las cuales son legítimas en sí y otras son valederas en relación con las circunstancias políticas y sociales de los países de nuestro continente. Se trata, en este caso, de "hechos" más que de "razones".

El principal, es, sin duda, el del papel que las Fuerzas Armadas desempeñan en América Latina. Más que instrumentos de la política exterior, esto es: obedientes guardianes de la soberanía nacional y de la inviolabilidad del territorio, ellas son, no ya instrumentos, sino actores de la política interna. El militarismo, es decir la intervención excesiva o abusiva de los militares en el gobierno de un país, es un mal antiguo en este continente. De tal manera, reducir los gastos de Defensa Nacional es, sencillamente, ponerle el cascabel al gato. En la mayoría de los casos será muy poco lo que se pueda avanzar atacando frontalmente el problema, incluso en países donde gobiernos civiles y constitucionales han sucedido a dictaduras militares. En casi todos ellos, el Ejército ha conservado su influencia y debe ser tratado con muchos miramientos.

El único camino por el cual se puede avanzar hasta una solución definitiva es el que da un rodeo buscando el afianzamiento de la democracia en el plano nacional y la vigorización efectiva del sistema interamericano en el plano internacional. Pero en ambos se choca con un círculo vicioso. ¿Cómo afianzar la democracia y robustecer sus bases económicas y sociales mientras las fuerzas armadas conserven su influencia excesiva y absorban una parte tan considerable de los recursos nacionales que deberían destinarse a finalidades reproductivas? O ¿cómo avanzar hacia formas superiores de organización —integración económica, aplicación efectiva de la solución pacífica de los conflictos, intervención colectiva, etc.— mientras se mantengan los celos y rivalidades nacionales avivados por la carrera armamentista?

Uno de los puntos de ruptura del círculo vicioso parece, sin duda, una política realista —esto es, prudente y paulatina— no de mera limitación de los actuales armamentos sino de efectivo desarme. Las medidas de ese tipo no deberían restringirse al mero ámbito sudamericano ni tampoco al latinoamericano, sino abarcar a todos los miembros de la O.E.A., ya que está comprometida la seguridad continental y, por otro lado, Estados Unidos es —y aspira a ser cada día más— el más importante proveedor de armas de los países de este continente. Tales medidas podrían ser estudiadas y acordadas en una conferencia especial, pero nada debería hacer perder de vista el hecho que el desarme —o el arma-

mentismo— es un problema de orden general, es decir, político y no técnico. Lo que se haga en materia de desarme —y la experiencia lo confirma— es simplemente negativo y provisional y puede tener efectos positivos y duraderos sólo en la medida en que se den pasos hacia adelante, hacia el establecimiento de una verdadera comunidad de naciones americanas democráticas. Todo fácil optimismo sería, pues, engañoso. Hay mucho camino que andar. Razón de más, para dar, a la brevedad posible, los primeros pasos.

ALEJANDRO MAGNET

BUENOS AUGURIOS PARA 1960 EN EE. UU.

El año 1960 ha comenzado en EE.UU. con mejores auspicios que acabó su predecesor 1959. La visita del Presidente Eisenhower a once naciones y la reunión en París con los representantes supremos de Francia, Inglaterra y Alemania Occidental ha levantado la moral del pueblo que se hallaba un tanto deprimida con los últimos triunfos rusos en el campo de los cohetes y de las armas nucleares. Ahora —se dice— ya podrá presentarse dignamente EE. UU. en la reunión en la cumbre y contrarrestar las alharacas de Krushev. París y Mayo serán el lugar y tiempo de una de las muchas reuniones que el Dictador ruso parece desea celebrar. Y decimos "parece" porque hay quien piensa que el secreto designio de Krushev es dividir definitivamente a los occidentales y tratar luego separadamente con cada uno de ellos. Y como en París no se ha llegado a una ruptura (aunque los franceses se hayan mostrado un tanto recalcitrantes a dejarse gobernar por los anglo-americanos) ya ha comenzado a torpedear la conferencia en la cumbre insistiendo en que se acepte antes su irrealizable proyecto de desarme universal que propuso él mismo en su visita a las Naciones Unidas en Septiembre pasado.

Sea de ello lo que quiera, el hecho real es que con reunión en la cumbre o sin ella EE. UU. continúa constituyendo la única esperanza actual de los pueblos libres de poder continuar siendo libres aun en medio de su pobreza y la única manera de defender sus familias y sus tierras de la amenaza de una tiranía comunista. Este es el modo

cómo se han interpretado aquí las calurosas ovaciones tributadas a Eisenhower a lo largo de su dilatado viaje, sobre todo en la India, España, Turquía y Afganistan. Y a nuestro juicio con acierto. Porque esas muestras de entusiasmo popular, jamás ofrecidas al paso de Kruschev, suponen en su libre sinceridad algo más que la mera curiosidad por ver un personaje importante.

El Vicepresidente Nixon será quien recoja en el próximo período presidencial esta mies de buena voluntad sembrada por su predecesor incluso en las repúblicas latinoamericanas que piensa visitar en breve, ya que con la retirada súbita de la candidatura de Rockefeller, los Republicanos dan por seguro el triunfo de éste en las elecciones de fines de este año. Y ello a pesar de que no es oro todo lo que reluce y de que los Demócratas sabrán aprovechar en su favor la situación económica de la nación, menos próspera a su juicio que lo que debiera ser, la gravedad del régimen tributario actual y las desagradables implicaciones que puedan resultar del coqueteo actual con la Rusia soviética.

Es cierto que la Diosa Prosperidad se halla cómodamente asentada de este lado del Atlántico. Pero sus miradas complacientes hacia la Europa Occidental comienzan a dar celos a EE. UU. No se puede hablar de un verdadero receso sino más bien de una disminución en la velocidad del desarrollo económico, o si se quiere un aumento cada vez menor de ella, frente a una vigorosa consolidación de los países arruinados por la última guerra. Pero es un indicio bastante significativo de esta inquietud la demanda hecha por EE. UU. a sus antiguos protegidos de Europa y Asia para que muestren ahora su agradecimiento hacia quien les ayudó a recobrar su poderío y supriman las trabas que aún existen a las exportaciones americanas. Estas, en vez de ir aumentando con el ritmo de la mayor prosperidad internacional, se han visto reducidas en un 20% en los dos últimos años.

Acaso ello se deba en no pequeña parte a que los costos, empujados por los crecientes salarios, vayan resultando cada vez menos competitivos sin que haya manera de detener esta peligrosa espiral, como lo ha confirmado la total paralización durante medio año de la industria del acero. Y aunque no debe parecer extraño que en un país que se gloria de su carácter democrata e igualitario sea la huelga el ins-

trumento ordinario para obtener mejoras sociales y económicas, todavía causa admiración el que estos resortes, vitales para la nación, puedan quedar a merced de un reducido número de representantes de la industria y de los sindicatos obreros. Sobre todo cuando su pertinacia y testarudez pase ya de la raya, como ha sido el caso actual en el que ha hecho falta todo el esfuerzo y la autoridad de Eisenhower para que después de innumerables intentos fallidos se haya llegado en el último momento a un compromiso preparado con toda clase de precauciones por el Ministro de Trabajo Mitchell y por el mismo Vice-Presidente Nixon laborando en común. Los americanos han mostrado su satisfacción al ver que el Nuevo Año les traía, por fin!, el término de esta verdadera pesadilla y la Bolsa ha reflejado su optimismo inmediatamente en el alza de sus cotizaciones.

Al cabo de seis meses de ansiosa espera, de paralización total de otras industrias (algunas tan importantes como la del automóvil), de pérdidas que alcanzan a miles de millones de dólares y de sufrimientos incontables por parte de tantas familias obreras faltas de recursos, los hornos americanos volverán a servir el acero del que tan necesitada estaba su economía.

El problema, más que de salarios, era de "manos libres dentro de la fábrica" (como decíamos en una crónica anterior) y la "moraleja" que se saca del cuento es que estas gentes han pretendido ignorar algo muy importante, y es que por encima de todo interés de grupo, por legítimo que sea, debe estar el interés nacional y el servicio de la comunidad, y que los aumentos en la productividad de la industria no deben beneficiarles a ellos solos, cuando no son ellos solos los que la han obtenido sino que se deben en gran parte al Estado, el cual con sus disposiciones acertadas fomenta el orden y la prosperidad pública y con el Estado y por su medio, todos los demás ciudadanos, sean obreros o no.

Por ello la solución más equitativa hubiera sido el dejar los salarios como estaban, congelar los beneficios de las Compañías si, como parece, eran excesivos y reducir en lo posible el precio del acero de manera que no subieran los precios de los demás artículos y se pudiera además competir en la exportación con germanos y rusos. Porque es de notar que éstos ponen ya en Ultramar el acero a menor precio que los americanos.

Pero el compromiso aceptado por ambas partes concede aumentos de salarios aún más generosos que los exigidos por los obreros y deja a las Compañías en libertad para fijar sus beneficios y consiguientemente los precios de venta del acero. No es extraño que el laudo dictado haya sido muy bien recibido por ambas partes. Los que acaso no queden tan complacidos sean los consumidores cuando todo ello se traduzca en una nueva alza de precios que ya el año pasado llegó a ser de un uno por ciento sobre el anterior; alza de precios que ya preven los economistas para este año, aunque acompañada (según ellos) de mayor empleo y prosperidad.

Por su parte el Subsecretario de Estado Dillon anuncia que no se reducirá la ayuda militar y económica al exterior y que los ingresos obtenidos del aumento en las exportaciones cubrirán con creces cuanto hace falta para estos gastos. Las previsiones parecen indicar que EE. UU. está entrando decididamente por el camino de una moderada inflación.

PUEDE UN CATOLICO SER PRESIDENTE DE EE.UU.?

La mera posibilidad de que un católico sea elegido Presidente saca de quicio a muchos protestantes ya que tal elección vendría a poner en evidencia la aguda crisis por la que está pasando el Protestantismo en EE.UU. Por ello a medida que se va acercando el período electivo redoblan sus esfuerzos para impedirlo. Uno de los medios más socorridos es el suponer que un Presidente católico habría de estar en un conflicto de conciencia casi perpetuo entre sus obligaciones como Presidente y su fidelidad a la doctrina de la Iglesia. Y aunque a estos escrupulosos Fariseos les tiene sin cuidado los conflictos de conciencia que puedan tener otros candidatos, exigen de los católicos declaraciones públicas sobre cuál sería su actitud en tal o cual caso y airean y comentan sus declaraciones con la sana intención de hacerlos impopulares.

Una frase de la declaración oficial de los Obispos católicos sobre el Control de Nacimientos en la que dicen que "los católicos no apoyarán dentro ni fuera del país ninguna clase de ayuda para prevenir artificialmente los nacimientos, para hacer abortar o para esterilizar" ha servido a las mil maravillas para este fin. Están obligados los candidatos católicos a seguir estos

principios? —ha preguntado al punto el Obispo episcopaliano Santiago A. Pike de California. Como si la observancia de los grandes principios de la moral natural no obligara a todo ser humano.

La revista "Life" se ha considerado obligada a "arrojar luz" sobre un asunto tan "claro" como es éste y acaba de publicar un largo artículo del citado Obispo Pike, que es Presidente del Comité de Consiliarios Eclesiásticos de la llamada "Federación de Paternidad Planeada de América" destinado a ilustrar a sus lectores. Claro está que "Life" con la "imparcialidad" que le caracteriza promete publicar "otras opiniones de las autoridades católicas"...si se las dan, que lo dudo. Pues bien: en el referido artículo (véase "Life" Dic. 21, 1959, pp. 79 a 85) a la pregunta de si "podría un católico ser Presidente de EE.UU." Pike responde prácticamente que no, ya que para que el elector pueda votar a un católico deberá conocer de antemano (según Pike, naturalmente) cuál es su actitud en todas y cada una de las materias importantes que puedan ofrecer alguna conexión con sus convicciones religiosas. Esto es prohibir lisa y llanamente a lo protestantes votar a un católico que quiere ser católico y por ser católico, lo cual es una flagrante violación de la Constitución en la cual se afirma que en la elección de una persona para un cargo público no se deberán tener en cuenta para nada sus convicciones religiosas.

Es claro además que las leyes no las hace el Presidente sino la Cámara de Representantes y que por lo tanto la responsabilidad moral cae sobre ellos y no sobre el Presidente, y que, aunque requieran su firma, la ley entra automáticamente en vigor a los diez días de presentada al Presidente aunque éste rehuse firmarla.

Todo ello prueba lo irreal de la posición adoptada por Pike y sus cómplices.

Como comenta la revista *Commonweal*, en una democracia cada cual es libre para defender su punto de vista particular, pero ello no quita el que una vez promulgada una determinada ley haya de ser aplicada en nombre de la nación y obedecida por todos. A no ser (añadiremos nosotros para dejar las cosas en claro) que sea una ley que vaya abiertamente contra el bien común, porque entonces no puede llamarse ley.

SEBASTIAN MANTILLA, S. J.

Nueva York, Enero 1960.